



REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA  
ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS Y  
OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES  
GINEBRA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES  
UNION EUROPEA Y COOPERACION  
R.P. DE ESPAÑA ANTE LA ONU  
CANCELLERIA

SALI 02/03/2021 16:03 No REG.: 215  
No NOTA VERBAL SALIDA: 83

EPG/LV

La Misión Permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, saluda atentamente a la Secretaría de las Naciones Unidas (Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos) y tiene el honor de remitir la respuesta del Gobierno de España a la información solicitada relativa a la **Comunicación AL ESP 5/2020**.

La Misión Permanente de España aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Secretaría de las Naciones Unidas (Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos) el testimonio de su más alta consideración.



Ginebra, 2 de marzo de 2021

Secretaría de las Naciones Unidas  
Oficina de la Alta Comisionada  
para los Derechos Humanos  
Palais Wilson  
Ginebra

## **RESPUESTA DE ESPAÑA A COMUNICACIÓN AL ESP 5/2020**

### **1. Sírvanse proporcionar toda información o comentario complementario respecto de a las alegaciones arriba mencionadas.**

La detención de D. Chidi Ironi, producida el día 26.06.20, quedó reflejada en Atestado Policial número 19122/20, de la Comisaría de Distrito de Carabanchel (Madrid). La actuación policial, según las manifestaciones de los policías actuantes, se ajustó a la legislación vigente y los supuestos contemplados, sin que en ningún caso tuviera que ver con motivos raciales o ningún tipo de discriminación, sino en relación a causas objetivas.

En la comparecencia de los funcionarios de policía que practicaron la detención éstos manifestaron que mientras realizaban labores de prevención de la delincuencia por una zona frecuentada por personas que se dedican al menudeo y tráfico a pequeña escala de sustancias estupefacientes, observaron como un varón, que previamente les había grabado con su terminal móvil en una intervención policial diferente a la actual, realiza un movimiento esquivo y huidizo ante la presencia policial, motivo por el que deciden identificarle ante una futura y presunta infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre.

Las actuaciones policiales tendentes a la identificación de personas tienen su marco legal en el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (en adelante LOPSC), donde se recogen los supuestos en los que una persona puede ser identificada por un agente policial. En concreto se establece que:

En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos:

- a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción;
- b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito.

En estos supuestos establece la ley que se ha de respetar estrictamente los criterios de *proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social*.

De esta forma, y siempre de acuerdo con las manifestaciones de los funcionarios de policía actuantes, la identificación de D. Chidi Ironi cumple con los requisitos legales en tanto que, en funciones de indagación, existían indicios de haber podido cometer una infracción administrativa previa (grabación previa de agentes actuantes, lo que, en la fecha de los hechos, podría ser constitutivo de una vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos), además de que, en sus funciones de prevención, se encuentran en una zona de alto impacto en la seguridad ciudadana por el menudeo de drogas, y el individuo en cuestión se comportaba de forma huidiza y esquivo.

Según el atestado policial, los funcionarios de policía requieren la documentación a D. Chidi Irondi **hasta en 19 ocasiones** y en varios idiomas, a los fines indicados en los párrafos previos, con resultado negativo. Asimismo, un compañero de piso del Sr. Irondi, presente durante los hechos, intenta mediar, indicándole en varias ocasiones que facilite su documentación a los actuantes, negándose el Sr. Irondi en todo momento a ello, y siendo por ello detenido por un presunto delito de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

En dicho atestado consta, además, que D. Chidi Irondi:

- a. Fue debidamente informado de los derechos que le asisten, si bien se negó a firmar el Acta de Información de Derechos.
- b. Se negó a ser asistido por un indicativo SAMUR (Servicio municipal de atención sanitaria de urgencias y emergencias) que se desplazó hasta las dependencias policiales y cuyas unidades prestan, entre otros servicios, atención sanitaria profesional de urgencias.
- c. Se negó a ser identificado dactilarmente a efectos de su pre-reseña e inicio del Protocolo de Identificación de Detenidos vigente.
- d. Se le propuso para sanción administrativa en el Acta-Denuncia correspondiente con motivo de portar sustancias estupefacientes en vía pública. Según el artículo 19.2 de la LOPSC, la aprehensión durante las diligencias de identificación, registro y comprobación de armas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros efectos procedentes de un delito o infracción administrativa se hará constar en el acta correspondiente, que habrá de ser firmada por el interesado; si éste se negara a firmarla, se dejará constancia expresa de su negativa. El acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, salvo prueba en contrario.

De acuerdo con el relato contenido en el atestado, en ningún momento se produjeron malos tratos, vejaciones, ni uso excesivo de la fuerza hacia D. Chidi Irondi, siendo además que éste **rechazó la asistencia médica ofrecida**, incluso existiendo un indicativo SAMUR, comisionado a tales efectos.

Se significa además que, según el contenido del atestado policial, los derechos del detenido fueron totalmente respetados en tanto que fue informado in situ y en Comisaría, negándose el mismo a firmar el Acta de Información de Derechos.

Queda constancia, como no puede ser de otro modo, de la asistencia de letrado de oficio, de forma que el acceso a la justicia estuvo plenamente garantizado.

El resto de los derechos, tales como asistencia médica, intérprete, acceso a la asistencia consular, etc., de acuerdo con el atestado, los tuvo plenamente accesibles, si bien son derechos de libre disposición, en tanto a hacer uso de los mismos.

La asistencia médica se le facilitó y se negó a ello el propio detenido.

Por otro lado, sí hizo uso de la comunicación a la persona que eligió, y recibió asistencia letrada, no instando otros derechos como la asistencia de intérprete, o la comunicación consular.

**2. Sírvanse indicar las medidas administrativas y judiciales adoptadas para llevar a cabo una investigación exhaustiva, pronta e imparcial de los hechos mencionados, así como para enjuiciar y sancionar a los agentes de policía responsables.**

Realizadas las comprobaciones oportunas, se ha podido determinar que en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, en el marco del procedimiento por Juicio Rápido con motivo de la detención por presunto delito de resistencia y desobediencia de D. Chidi Irondi, fue interpuesto un recurso por éste. A fecha 01.02.21, los hechos se encuentran en fase de instrucción, no existiendo actualmente ninguna imputación dirigida a los funcionarios actuantes de Policía Nacional.

A nivel interno en Policía Nacional, en caso de que el Juzgado impute a los funcionarios actuantes, y de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, se iniciaría un procedimiento sancionador, pues la citada Ley Orgánica recoge como falta muy grave toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

En tanto que el expediente se encuentra en sede judicial, y no es posible acceder al mismo pues sólo las partes del proceso tienen ese derecho, no siendo parte en estos momentos ningún funcionario de policía, es necesario esperar a los resultados de procedimiento judicial, previamente a la iniciación de un procedimiento sancionador interno.

Siendo que el respeto y protección de los derechos humanos es la máxima que debe regir todo comportamiento policial, por parte de la Oficina Nacional de Derechos Humanos de la Policía Nacional, en virtud de las funciones que como Observatorio en materia de derechos humanos tiene asignadas, se va a realizar un seguimiento minucioso de este caso.

**3. Sírvase indicar qué medidas han sido adoptadas para prevenir la violencia policial, la incitación a la violencia y la discriminación racial contra personas afrodescendientes, migrantes y todas las demás formas múltiples e interseccionales de discriminación, y cómo éstas son implementadas.**

La lucha contra la discriminación es una prioridad desde hace años tanto para el Ministerio de Interior como para los órganos en él insertos.

En el año 2018 se ha creado en el Ministerio del Interior la **Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio** (en adelante, ONDOD), aprbándose un año después el “Plan de acción de lucha contra los delitos de odio” (disponible en la página web del Ministerio del Interior<sup>1</sup>), mediante la Instrucción 1/2019 de Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, en el que se incluyen más de 50 medidas a implementar para mejorar tanto la prevención y respuesta a los delitos de odio, como la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la atención a las víctimas.

Como parte de esas medidas, se destaca precisamente la incorporación en los planes de estudios, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, tanto en las academias de acceso, como en las de promoción interna a otros empleos, así como en los cursos online de acceso a personal no especializado, contenidos curriculares específicos sobre protección de derechos humanos y rechazo a los “delitos de odio”. Dando especial importancia al tratamiento de la víctima de estos hechos tanto en el momento de la recepción de la denuncia como en cualquier contacto que el funcionario policial pueda tener con la misma.

Asimismo, se incluye la promoción de actividades formativas como seminarios, mesas redondas, encuentros, etc. que se abran a la participación de organizaciones del tercer sector y otros actores involucrados como Fiscalía o medios de comunicación social, tanto a nivel central, como a nivel territorial, además de contar para la planificación de esas formaciones con organizaciones representativas de los colectivos de víctimas y en su impartición con la presencia de profesionales especializados de las organizaciones que pueden aportar su conocimiento, así como con víctimas que puedan dar su testimonio.

Por otro lado, a parte de las exigencias propias del ordenamiento jurídico español, contenidas, entre otras normas, en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; la Ley Orgánica 6/85, del Poder Judicial; la Ley 50/1981, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECRIM); y la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, desde la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) se han establecido diversos mecanismos de supervisión de la actividad policial en garantía de los derechos de los ciudadanos y con el objetivo de erradicar cualquier forma de violencia o extralimitación o vulneración de derechos fundamentales durante intervenciones policiales, prestando especial atención a quienes son objeto de privación de su libertad ambulatoria.

Entre los instrumentos habilitados destacamos los instaurados por Policía Nacional, Guardia Civil y la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.

---

1

<http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/PLAN+DE+ACCI%C3%93N+DE+LUCHA+CONTRA+LOS+DELITOS+DE+ODIO/c469581b-9e19-47a5-8340-45d138ab246a>

La **Policía Nacional** cuenta con instrumentos de actuación estables y eficaces en esta materia, tanto en el plano preventivo como en el plano operativo.

Con una perspectiva estratégica, la Policía Nacional ha dado un paso al frente en materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos y la igualdad, creando el Área de Derechos Humanos e Igualdad (2020), que comprende la Oficina Nacional de Derechos Humanos (2019) y la Oficina Nacional para la Igualdad de Género (2018).

Este Área ha sido creada en 2020 y configurada de forma integral y transversal para la priorización e impulso de ambas Oficinas, creadas previamente en 2019 y 2018, constituyendo una importante línea estratégica dentro de la Policía Nacional, vinculada a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incorpora en el Objetivo 5 la Igualdad de Género, y en el Objetivo 16, sub-objetivo 16-B los Derechos Humanos.

La creación de la Oficina Nacional de Derechos Humanos en la Policía Nacional, mediante Resolución de 27 de septiembre de 2019 de la Dirección General de la Policía, pretende afrontar los múltiples contextos en los que la labor policial se desarrolla desde una perspectiva centrada en los derechos humanos, como camino para consolidar y aumentar la confianza de la sociedad en esta Institución.

De esta forma, esta Oficina se constituye como Observatorio desde donde se abordan cuatro escenarios primordiales:

- Policía Nacional como referente en buenas prácticas en materia de Derechos Humanos. Código Ético y regulación interna policial de las actuaciones en los principales ámbitos policiales.
- Víctimas de delitos, así como otras personas que interactúan en el marco policial, y afectación de Derechos Humanos en los distintos contextos relacionados con la función policial.
- Derechos Humanos de las personas detenidas, custodiadas o identificadas en el marco de la práctica policial.
- Derechos Humanos del personal policial.

Los pilares fundamentales para impulsar la labor de ambas Oficinas Nacionales son:

- 1.- La formación, sensibilización y concienciación.
- 2.- Promover y mantener relaciones con otras Administraciones e Instituciones Públicas o Privadas, nacionales e internacionales, con la finalidad de intercambiar información y buenas prácticas, como vía de enriquecimiento multilateral.
- 3.- Analizar en profundidad la realidad policial, de forma transversal y multidisciplinar, diseñando objetivos a corto, medio y largo plazo, en función de los análisis realizados y resultados obtenidos, proponiendo medidas para implementar dichos objetivos, en el marco de unas líneas estratégicas acorde, así como un mecanismo de evaluación a medio y largo plazo, que permita valorar el impacto de las acciones realizadas.

El Área de Derechos Humanos e Igualdad, con la finalidad de implementar sus objetivos e incrementar su efectividad, cuenta con una Red Nacional de Puntos de Contacto, compuesta por 35 agentes especializados en derechos humanos e igualdad, a nivel central y territorial, de forma que se disponga de cobertura territorial directa en el cumplimiento de los cometidos y objetivos del Área.

Entre las funciones de esta Oficina Nacional de Derechos Humanos, específicamente se encuentra la de servir como Observatorio para velar por los derechos humanos de las personas detenidas, custodiadas o identificadas en el marco de la práctica policial, con el ánimo de incrementar la confianza de la sociedad en la institución policial, visibilizando y consolidando los mecanismos internos en la protección de los derechos humanos de todas las personas que interactúan con la Institución, así como de las que forman parte de la misma.

Desde esta Oficina se ha desarrollado un plan formativo centrado en la especialización del personal policial en materia de Derechos Humanos a través de la interiorización y puesta en práctica de los textos legales internacionales y códigos deontológicos policiales: Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley (Asamblea General, resolución 34/169 de 17 de diciembre 1979), Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía (2013), y Código Europeo de Ética Policial (Recomendación del Consejo de Europa adoptada por el Comité de Ministros el 19 de septiembre de 2001), en los que se establecen los principios fundamentales para llevar a cabo controles de identidad en consonancia y respeto por los derechos humanos.

La Oficina Nacional de Derechos Humanos cristaliza la responsabilidad de la Institución, asumiendo que debe abarcar no solo la teoría académica, sino asegurar su conocimiento, interiorización y puesta en práctica, impulsando una conciencia colectiva e individual que tenga como inicio, continuación y fin la observancia de los derechos humanos.

Además, la Policía Nacional cuenta con la figura de los Delegados de Participación Ciudadana que desempeñan, entre otras funciones, la labor de interlocutor social, en sus respectivos ámbitos territoriales, para el cumplimiento de la Instrucción 16/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre el "Protocolo de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación".

En el ejercicio de la función de "interlocutor social", se realiza una campaña de actuaciones, dirigidas a todo el entramado social, tendentes a la prevención de comportamientos en la población que pudieran considerarse discriminatorios o desiguales, atendiéndose todas las demandas de las personas, grupos y colectivos de la sociedad civil que se reciben en la Unidad Central de Participación Ciudadana.

Entre las funciones de las Delegaciones se encuentra la constante actualización y formación tanto de los propios miembros de las Delegaciones de Participación Ciudadana como del resto de funcionarios de la Policía Nacional, en esta materia, buscando la excelencia y la igualdad en el trato hacia los diferentes colectivos.

Por su parte, la **Guardia Civil** contempla en todo su sistema de formación y perfeccionamiento acciones sobre esta temática. Para ello se ha implementado el programa THACLE de la OSCE.

Además, en las jornadas de formación de especialistas que trabajan con víctimas sensibles se han incluido sesiones expresamente dedicadas a los delitos de odio. En ellas se aborda la problemática tanto a nivel de tratamiento penal y de confección de atestados, como a nivel operativo (aplicación de la Instrucción 1/2019 e investigación de tales conductas);

haciendo especial hincapié en el especial tratamiento que debe recibir la víctima de estos delitos.

Finalmente, en cuanto a la **Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (IPSS)**, señalar que:

a) En el marco del que fue el Plan Nacional de Derechos Humanos 2008, la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) dispone de una base informática para conocimiento, seguimiento, impulso y evaluación de todas las denuncias interpuestas contra actuaciones de miembros de los dos Cuerpos de Seguridad estatales (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en adelante FCSE, Policía Nacional –DGP ó PN– y Guardia Civil –DGGC ó GC–) en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas y que puedan suponer una extralimitación o vulneración de los derechos de las personas que se encuentren bajo custodia policial. Desde 2016 es la IPSS quien asume la responsabilidad del control y seguimiento de los registros que sobre ella introducen la DGP y la DGGC.

b) Las FCSE están obligadas a elaborar un registro documental nominal, completo e inmediato de todas las actuaciones policiales que suponen una afección en la libertad ambulatoria de un ciudadano. A estos efectos se dispone de los siguientes libros de registro oficiales:

- 1.- Libro de Registro y Custodia de Detenidos.
- 2.- Libros de Menores Detenidos.
- 3.- Libros de Menores e Incapaces en Situación de Riesgo.
- 4.- Libro de Registro de Diligencias de Identificación.

Desde el 1 de mayo de 2019, en virtud de la Instrucción 14/2018, de la SES, estos libros se configuran en un entorno digital que facilita y garantiza el acceso remoto e inmediato por parte de la IPSS. Igualmente se contempla el acceso a sus registros por las autoridades judiciales, Ministerio Fiscal, Defensor del Pueblo, dotando de mayor transparencia a las actuaciones operativas. Este proyecto, denominado DILISES (digitalización de los libros de registro oficiales de la SES), se mantiene en permanente actualización para su adaptación a las nuevas situaciones.

c) La custodia de los detenidos es otra de las actividades que, para esta IPSS, debe realizarse con el mayor grado de garantías. Por ello, las SES elaboró un procedimiento de custodia de detenidos en el ámbito de las FCSE, plasmado en la Instrucción 4/2018, de la SES, cuyo seguimiento es objeto de verificación con ocasión de la actividad ordinaria de inspección de la IPSS, así como a través de requerimientos directos ante incidencias relevantes. Este procedimiento adiciona garantías para los detenidos, evitando cualquier forma de discriminación racial y dispone de sistemas verificables de su cumplimiento.

d) Desde la SES se efectúa un seguimiento puntual y diario de todos los sucesos que deriven en fallecimiento o lesiones de los ciudadanos en dependencias policiales (ocasionados en su inmensa mayoría por actividades autolíticas) o con ocasión de una intervención policial. Los registrados en los centros de custodia de detenidos son objeto de atención prioritaria. El tratamiento y análisis integral de todos estos sucesos sirve para elaborar mapas de riesgos con los que adoptar las medidas necesarias para que no vuelvan a producirse.



e) La IPSS actúa como punto de contacto nacional del Mecanismo de denuncias FRONTEX (Reglamento UE 2016/1624, “mecanismo de denuncia” con el fin de “supervisar y garantizar el respeto de los derechos fundamentales en todas las actuaciones de la Agencia”).

f) La IPSS asume la realización de las inspecciones sistemáticas establecidas en el Real Decreto 162/2014, que aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Además, se gestionan cuantas novedades relevantes se producen con ocasión de las actuaciones policiales de custodia en estos centros.

g) La creación de mecanismos de colaboración y coordinación de actuaciones con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura forma parte de los objetivos prioritarios de la IPSS. La atención a los requerimientos de información que efectúa es inmediata, aportando cuanta documentación se dispone, con la firme convicción de dotar de total transparencia a las actuaciones policiales.

h) La formación del personal de las FCSE en la prevención de la tortura, la violencia policial, la incitación a la violencia y la discriminación racial es otra de las líneas de actuación prioritaria y en permanente desarrollo. Las FCSE disponen de múltiples y diferentes acciones diseñadas tanto en la formación requerida para el ingreso en la función pública como en la formación, promoción y especialización.

Además, la IPSS tiene entre sus funciones las de promoción de actuaciones que favorezcan la integridad profesional y deontológica de los miembros de las FCSE. En los últimos años se han venido organizando jornadas dirigidas para el conjunto de los inspectores auditores de la IPSS así como funcionarios de las FCSE.

Incluso, en la actividad inspectora propia de la IPSS, se incluye el desarrollo de acciones formativas específicas: en la actualidad se desarrollan estas acciones en cada una de los centros, dependencias y servicios visitados en el marco del proyecto DILISES y del protocolo de custodia de personas detenidas. Además, se aprovecha la acción inspectora para garantizar la divulgación de cualquier aspecto que se considera de interés.

**4. Sírvanse brindar información sobre las medidas adoptadas para garantizar que las víctimas de violencia policial de carácter racial tengan acceso a mecanismos de denuncia independientes y eficaces.**

En España la posibilidad de denuncia de hechos relacionados con la violencia policial o la discriminación racial está garantizada.

La denuncia de cualquier hecho supuestamente delictivo está avalada en las normas que regulan el procedimiento penal (fundamentalmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal), incluyendo la facultad de formar parte del proceso y de beneficiarse de los derechos como víctima del delito, tal como se dispone en la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito. Es decir, que cuando una víctima es objeto de una conducta que pudiera ser constitutiva de delito, puede recurrir a los procedimientos de denuncia que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La posibilidad de interponer denuncia existe no solo en el propio cuerpo policial denunciado sino a través de los distintos cuerpos policiales de nivel nacional, autonómico y local distribuidos en nuestro territorio nacional además de poder hacerlo, por supuesto, ante el Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial. De este modo, cualquier persona puede acudir a cualquier juzgado de guardia, donde podrá presentar denuncia por los hechos que considere, de forma autónoma y sin mediar trámite alguno en ninguna dependencia policial, lo que asegura una total independencia cuando se denuncia hechos presuntamente cometidos por funcionarios policiales.

Además, cualquier ciudadano puede comunicar cualquier situación que identifique como insatisfactoria del servicio que se le presta, y no constituya infracción penal, mediante los formularios de quejas y sugerencias disponibles en todas las dependencias de las FCSE (Real Decreto 951/2005). Una vez realizado el estudio individualizado de cada caso, se deriva a las autoridades judiciales y/o disciplinarias aquellos hechos que deben ser de su conocimiento, contribuyendo a la realización de investigaciones plenas y eficaces. La Instrucción 7/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad regula la obligatoria existencia en todas las dependencias policiales de un Libro de Quejas y Sugerencias, en el que cualquier ciudadano puede exponer sus quejas en relación con cualquier interacción policial, siendo obligatorio, por parte de la administración, dar cumplida respuesta e información adecuada de las actuaciones llevadas a cabo y, en su caso, información de las medidas adoptadas. Estas medidas se han reforzado con la emisión de la Instrucción 8/2019, de la SES, por la que se publica la Guía de buenas prácticas en la tramitación de quejas y sugerencias.

En lo relativo a las competencias y funciones de la **ONDOD**, como parte de las medidas del Plan de Acción antes reseñado, se incluye la necesidad de conocer las quejas que se realicen hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el trato con víctimas de supuestos “delitos de odio”. Para ello, junto a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad se ha implementado un nuevo código en el que se pueda concretar, de forma expresa, cualquier posible queja que exista en este ámbito.

**5. Sírvanse informar si el perfilamiento racial, y la discriminación racial directa e indirecta están expresamente prohibidas en la legislación relativa a la policía y agentes del orden. Indique qué medidas han sido adoptadas para garantizar que esta prohibición sea respetada por todos los agentes de policía, y cuáles son los mecanismos existentes para asegurar su aplicación.**

La legislación que rige el funcionamiento policial, al igual que la legislación española en general, expresamente prohíbe cualquier tipo de discriminación, directa o indirecta.

La Constitución Española (Art. 14) garantiza la igualdad de todos los ciudadanos; y la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Art. 23) prohíbe cualquier acto discriminatorio contra personas por razón de su etnia, raza u origen nacional. Por su parte, el artículo quinto de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sobre los principios básicos de actuación, dispone: la adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente “Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, “Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión”, y las relaciones con la comunidad, singularmente, “Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral”.

Asimismo, el artículo 16 de la LOPSC, sobre la identificación de personas, recoge en el último párrafo del apartado 1 que: “En la práctica de la identificación se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Estas directrices son igualmente contempladas por distinta normativa operativa y deontológica policial. El incumplimiento de todos estos principios, conlleva la intervención de los mecanismos de control existentes al efecto y su correspondiente sanción.

Igualmente, cabe señalar el obligado cumplimiento que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la Instrucción 7/2015, de 30 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad relativa a la práctica de la diligencia de identificación, los registros corporales externos y actuaciones con menores, previstos en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Además, las FCSE están obligadas a llevar un registro documental electrónico nominal, completo e inmediato de todas las actuaciones policiales que suponen una afeción en la libertad ambulatoria de un ciudadano. Uno de ellos es el Libro de Registro de Diligencias de Identificación al que la IPSS tiene acceso remoto y está a disposición de las autoridades judiciales, Ministerio Fiscal y Defensor del Pueblo.

La adhesión de **Policía Nacional** a los valores éticos, constitucionales y democráticos, y los derechos humanos se ha visto reflejada en los principios básicos constitucionales que rigen la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recogidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de forma general, pero también, de forma específica, a través de la promulgación del Código Ético de Policía Nacional en el año 2013, el cual supuso una concreción y recopilación de las conductas y valores profesionales que deben

guiar las decisiones y actuaciones del personal policial, en consonancia y equilibrio con el mandato atribuido por el artículo 104 de la Constitución a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana. Específicamente, el artículo 20 del Código Ético de Policía Nacional establece que “la policía debe ofrecer su servicio sin ningún tipo de discriminación por razón de origen, lengua, raza, etnia, religión, creencias, sexo, edad, ideología, discapacidad o condición sexual”.

Las actuaciones policiales tendentes a la identificación de personas tienen su marco legal en el artículo 16 de la LOPSC, ya citado pormenorizadamente en el punto 1 de este informe, el cual recoge los supuestos en los que una persona puede ser identificada por un agente policial. En estos supuestos establece la ley que se ha de respetar estrictamente los criterios de “proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Por otro lado, desde la DGP se ha dictado la Circular 2/2012, de 16 de mayo, sobre identificación de ciudadanos, en la que se señala que en el desarrollo de los planes y dispositivos operativos selectivos se “debe evitar toda práctica que pudiera conllevar una restricción indebida de los derechos y libertades de los inmigrantes, prohibiéndose en este sentido el establecimiento de cupos de identificación o detención de extranjeros a cualquier unidad del Cuerpo Nacional de Policía, evitándose igualmente actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos”.

Igualmente, la Instrucción 4/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 17 de octubre, amplía la regulación de los registros corporales, que deben respetar los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación, recogiendo expresamente que se realizarán de modo que cause el “menor perjuicio a la intimidad, dignidad e integridad sexual” de la persona.

La literalidad de estos textos legales se imparte en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, para los agentes de nuevo ingreso, así como en los posteriores cursos ascenso, de actualización y especialización, en las que se forma al personal policial en materia de diversidad cultural y capacitación sobre la forma de llevar a cabo controles de identidad con arreglo a los principios de igualdad y prohibición de discriminación.

Este compendio normativo evidencia que la Policía Nacional cuenta con un sólido marco legal tanto en la prevención como en la erradicación de posibles conductas que pudieran considerarse arbitrarias, desiguales o basadas en perfiles discriminatorios, o cualesquiera otra que atenten contra los derechos humanos, siendo que, habiendo indicios de que se hayan producido, se inician los procedimientos sancionadores internos por parte de las Unidades de Régimen Disciplinario. La Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, recoge como falta muy grave toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

El estricto cumplimiento de todo el compendio normativo en esta materia, incluidas las normas internas de la institución policial, dota a la Policía Nacional de las herramientas

necesarias para erradicar ese tipo de actuaciones y contribuye a construir un firme marco de protección de los derechos humanos en general y la no discriminación en particular.

La Policía Nacional ha implementado exitosamente la conciencia de protección y promoción de los derechos humanos en su extensa y dilatada actividad, constituyéndose como referente nacional e internacional de buenas prácticas en este ámbito, contando, además, desde 2019, tal y como se ha expuesto en el punto 3 de este informe, con la **Oficina Nacional de Derechos Humanos de la Policía Nacional**.

La experiencia y desarrollo de medidas y políticas protectoras de los derechos humanos perfilan a esta Institución como referente democrático y social, de servicio al ciudadano y protección de sus derechos, poniendo de manifiesto las sinergias y el beneficio que puede generar en la sociedad compartir e intercambiar interinstitucionalmente, a nivel nacional e internacional, tanto en el sector público como en el privado, el conocimiento y experiencia adquiridos por la Institución.

**6. ¿Qué medidas ha adoptado el Estado para recopilar datos desagregados por raza, color de piel, origen nacional o étnico, a fin de detectar y prevenir el perfilamiento racial y la discriminación racial dentro de los cuerpos de policía y de seguridad?**

En el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC<sup>2</sup>) del Ministerio del Interior se recoge únicamente el país de origen de los autores/víctimas de delitos, que, en ningún caso sirve como información para proceder a establecer un perfil racial o étnico de persona alguna, tal y como recoge la Constitución Española y resto de legislación vigente en España.

No obstante, en materia específica de protección de los derechos humanos en grupos vulnerables por motivos de su origen nacional o étnico, sexo o género, ideología, identidad sexual, religión, capacidades intelectuales o físicas y situación socioeconómica, entre otras razones, se ha publicado en 2019 por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, un “Plan de Acción Policial contra los Incidentes y los Delitos de Odio”, teniendo como partida el “Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación” de 2014, ahora sustituido por otro de 2020, en cuanto compendio de reglas o pautas unificadas y homogéneas dirigidas a los agentes de los cuerpos policiales para la identificación, correcta recogida y codificación de incidentes y delitos racistas, xenófobos o conductas discriminatorios, y determinación de los elementos específicos a tener en cuenta en las actuaciones policiales a seguir.

Como organismo responsable de coordinar las medidas contempladas en este Plan, destaca el papel de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Este organismo depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y se constituye como “la herramienta clave para el estudio y análisis de los delitos de odio, así como para impulsar la colaboración con otros departamentos ministeriales, cuerpos policiales, organismos públicos y privados, asociaciones y ONGs.

Por último, en el año 2013, se editó el “Manual de apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la identificación y Registro de Incidentes Racistas y Xenófobos”, coordinado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

---

<sup>2</sup> <https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/>

**7. Sírvase indicar qué medidas han sido adoptadas a fin de instaurar un diálogo constructivo y significativo entre la policía y las minorías raciales y étnicas, incluidas las personas de ascendencia africana y personas migrantes. ¿Qué iniciativas han sido puestas en práctica para promover una actuación policial orientada hacia las comunidades?**

En el marco del citado “Plan de acción de lucha contra los delitos de odio” de 2019 se incluye la necesidad de reforzar y fijar una agenda de reuniones periódicas con organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la discriminación y delitos de odio en particular, tanto para conocer cuáles son sus necesidades, como para fomentar futuras colaboraciones en actividades docentes o de sensibilización y promoción de la denuncia de delitos de odio.

En base a ello, la **Guardia Civil** ha tenido presente que la para la erradicación de los incidentes y delitos de odio resulta imprescindible el diálogo y la colaboración constante con asociaciones, organizaciones y colectivos de ámbitos diversos y susceptibles de ser victimizados para lo que se ha creado la figura del interlocutor social tanto a nivel central como territorial. Este Interlocutor es el punto de contacto del Cuerpo con estos colectivos en sus respectivos ámbitos.

Por otra parte, en el “Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los Delitos de Odio y Conductas que Vulneran las Normas Legales sobre Discriminación”, recientemente actualizado mediante Instrucción 4/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad, se regula la figura del “interlocutor social”, que será desempeñado por un funcionario de los Cuerpos de Seguridad del Estado, entre cuyas funciones se incluye la de mantener estrechos contactos con los representantes de la sociedad civil, a la par que servirá de cauce de comunicación de las inquietudes que las diferentes ONGs le puedan presentar. Asimismo, mediante esta figura se fomentará el establecimiento de reuniones periódicas con las diferentes asociaciones representativas de derechos de los diferentes colectivos, todo ello, con el fin de dar a conocer, por un lado, la labor policial, y, por otro, los diferentes puntos de vista de estas asociaciones, que pueden redundar en una mayor efectividad de la actividad policial.

A su vez, tal y como se ha expuesto en el punto 3, la Oficina Nacional de Derechos Humanos en la **Policía Nacional** tiene como objetivos primordiales: actuar como delegada para la tutela de los derechos humanos en su función de interlocutora social en la materia, servir de enlace con otras Administraciones, cuerpos policiales e instituciones públicas y privadas, dentro y fuera de España, dedicadas a proteger los derechos humanos, e impulsar programas de formación en derechos humanos para el personal policial, incluido uno anual que incluye charlas, cursos, conferencias, coloquios o talleres.

Por otra parte, mencionado también en el punto 3 del presente informe, la Policía Nacional cuenta con la figura de los Delegados de Participación Ciudadana que desempeñan, entre otras funciones, la labor de interlocutor social, en sus respectivos ámbitos territoriales, para el cumplimiento de la Instrucción 16/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre el “Protocolo de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación”.

En el ejercicio de la función de “interlocutor social”, se realiza una campaña de actuaciones, dirigidas a todo el entramado social, tendentes a la prevención de comportamientos en la

población que pudieran considerarse discriminatorios o desiguales, atendiéndose todas las demandas de las personas, grupos y colectivos de la sociedad civil que se reciben en la Unidad Central de Participación Ciudadana.

Entre las funciones de las Delegaciones se encuentra la constante actualización y formación tanto de los propios miembros de las Delegaciones de Participación Ciudadana como del resto de funcionarios de la Policía Nacional, en esta materia, buscando la excelencia y la igualdad en el trato hacia los diferentes colectivos.

En la Policía Nacional la formación ocupa un lugar destacado en todas y cada una de las esferas de la Institución, en los procesos de acceso y promoción interna, y de forma transversal en todas las áreas y especialidades profesionales, para asegurar la capacitación necesaria del personal policial.

La formación y la concienciación vertebran la capacidad de la Policía Nacional para mantenerse actualizada y adaptada a la coyuntura social, y por ello constituye el pilar esencial para favorecer a través del conocimiento un avance progresivo y constante hacia una igualdad material y no solo formal.

Con este objetivo, el Área de Derechos Humanos e Igualdad, a través de su Oficina Nacional de Derechos Humanos, ha diseñado un Plan Integral de Formación en derechos humanos, el cual se imparte por especialistas en la materia, en tres dimensiones:

- Cursos de formación específica en derechos humanos, diferenciados por Escalas y/o Categorías.
- Ponencias específicas sobre derechos humanos incorporadas a cada curso de formación impartido por la Policía Nacional, tanto en especialización como en cursos de ingreso o de promoción interna.
- Cursos de formación on-line o teleformación.

Una de las constantes de la Policía Nacional es motivar a sus integrantes hacia la excelencia en las buenas prácticas policiales, concienciando sobre el trato respetuoso que deben dar a los ciudadanos, con empatía profesional. Ello ha supuesto que, en los distintos estudios sociológicos y encuestas demoscópicas, la Policía Nacional venga siendo una de las Instituciones mejor valoradas por la población.

Respecto a las medidas para la prevención de este tipo de conductas, además de la formación básica policial en la que ya se implementa el respeto por toda persona, independientemente de su raza, etnia o nacionalidad, cabe resaltar los cursos formativos impartidos desde el Área de Derechos Humanos e Igualdad, que integran módulos exclusivos con contenidos más concretos sobre la protección específica de los derechos de las minorías raciales y étnicas, y las comunidades migrantes, así como de las personas desfavorecidas.



**8. Sírvanse indicar qué medidas han sido previstas para definir el alcance y la aplicación de las disposiciones relativas al derecho de filmar las acciones e intervenciones de la policía. Sírvase indicar, además, qué medidas han sido adoptadas para proteger a las personas que filman los abusos y violencia por parte de agentes policiales.**

En nuestro ordenamiento, la normativa específica que regula estas actuaciones está habilitada por el artículo 22 de la LOPSC y desarrollada por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos (en adelante, LOVV), el Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y los capítulos IV, VII y X del Título VIII de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La utilización de videocámaras en el trabajo policial en lugares públicos para garantizar la seguridad ciudadana estará presidida por el principio de proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima.

El requisito de idoneidad determina que sólo podrá emplearse la videocámara cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Por otro lado, el mandato de intervención mínima exige la ponderación, en cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible afectación por la utilización de la videocámara al derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas.

De la misma manera queda establecido que el uso de videocámaras exigirá la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana, en el caso de las fijas, o de un peligro concreto, en el caso de las móviles.

Así, el artículo 5 de la LOVV enumera los requisitos legales de utilización de los dispositivos de grabación móviles estableciendo dos supuestos claramente diferenciados.

El primero, resultaría de su uso en las vías o lugares públicos donde se haya autorizado la instalación de videocámaras fijas, donde podrán utilizarse simultáneamente otras de carácter móvil para el mejor cumplimiento de los fines previstos en la Ley, quedando, en todo caso, supeditada la toma, que ha de ser conjunta, de imagen y sonido, a la concurrencia de un peligro concreto y demás requisitos exigidos en la ley.

El segundo, para su uso en los restantes lugares públicos de videocámaras móviles. En este caso, será necesaria la autorización de dicho uso que corresponderá al máximo responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quien atenderá, en su resolución a la naturaleza de los eventuales hechos susceptibles de filmación y adecuará el uso del dispositivo móvil a los principios previamente citados (peligro concreto y proporcionalidad).

Con carácter formal se exige que la resolución motivada que se dicte autorizando el uso de videocámaras móviles, se ponga en conocimiento de la Comisión de Garantías de Videovigilancia (Comisión) en el plazo máximo de setenta y dos horas, la cual podrá recabar el soporte físico de la grabación a efectos de emitir el correspondiente informe.

Solo en casos excepcionales de urgencia máxima, o de imposibilidad de obtener a tiempo la autorización indicada en razón del momento de producción de los hechos o de las circunstancias concurrentes, se podrán obtener imágenes y sonidos con videocámaras

móviles, dando cuenta en el plazo de setenta y dos horas, mediante informe motivado, al máximo responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Comisión, la cual, si lo estima oportuno, podrá requerir la entrega del soporte físico original y emitir el correspondiente informe.

En el supuesto de que los informes de la Comisión, previstos en los dos párrafos anteriores, fueran negativos, la autoridad encargada de la custodia de la grabación procederá a la destrucción inmediata de las grabaciones.

En todo caso, la Comisión será informada, quincenalmente, de la utilización que se haga de videocámaras móviles y podrá recabar en todo momento el soporte de las correspondientes grabaciones y emitir un informe al respecto.

Para el caso de que las autoridades competentes aludidas en esta Ley lo consideren oportuno, se podrá interesar informe de la Comisión sobre la adecuación de cualquier registro de imágenes y sonidos obtenidos mediante videocámaras móviles a los principios obligatorios de uso recogidos en la LOVV. Todo ello sin perjuicio de su uso en situaciones o actuaciones de investigación delictiva amparadas por los preceptos citados de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo régimen no se corresponde con lo anterior y queda circunscrito a dicha norma procesal penal.

En cuanto a la protección de las personas que graban a las FCS en sus actuaciones cabe señalar que gozan de la protección máxima e igual que el resto de las personas que denuncian sucesos ilícitos en nuestro país, significándose que dicha grabación debe ir dirigida a dicha finalidad y no a otras que atenten contra los derechos fundamentales o no de los agentes actuantes.

Por otra parte, el derecho a filmar las acciones e intervenciones de la Policía es un derecho contemplado en el ordenamiento jurídico español y reconocido por nuestro Tribunal Constitucional en Sentencia 172/2020 de 19 noviembre. Nuestra normativa nacional, avalada por el propio Tribunal Constitucional únicamente restringe el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, teniendo en cuenta el derecho fundamental a la información y no siendo necesaria una autorización previa para realizar la grabación.

La situación de riesgo o peligro, que restringe dicho derecho fundamental, debe reflejarse en el acta de denuncia o informes anexos, tal como establece la Instrucción 13/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad, pormenorizándose con el mayor detalle el peligro o riesgo generado y los medios que lo hayan provocado.

Por ello, teniendo claro que el derecho a la información es un derecho fundamental, su ejercicio está limitado al respeto a otros derechos fundamentales, como el derecho a la seguridad personal o familiar.

Por otra parte, sobre la adopción de medidas específicas para proteger a las personas que filman las actuaciones policiales, incluidos los posibles abusos y violencia por parte de agentes policiales, se consideran plenamente eficaces el conjunto de instrumentos recogidos en la respuesta a la pregunta 3, que se despliegan con la misma intensidad con independencia de la condición personal, actividad que ésta realice o lugar donde se

produzcan hechos de aquella naturaleza.

Además, el artículo 36.23 de la LOPSC contempla como infracción grave el uso [“no autorizado”, inciso declarado inconstitucional y nulo el 19.12.20] de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

La Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) 172/2020 de 19 noviembre declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “no autorizado” que se hallaba inserto en la redacción inicial del art. 36.23 LOPSC y acuerda que el resto del precepto no incurre en inconstitucionalidad.

Este precepto, que sigue en vigor con la salvedad indicada, castiga el uso de datos o imágenes de las autoridades o agentes policiales, con independencia de cómo o dónde fueran captadas; y sanciona ese uso por su aptitud para poner en peligro o riesgo la seguridad personal o familiar, la integridad de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación policial. Con ello se tutelan varios fines protegidos por la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Se ampara el libre ejercicio de derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento jurídico, así como “el respeto a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades”, pues prohíbe que se “ponga en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes”. Se protege también “la normalidad en la prestación de los servicios públicos básicos para la comunidad” y “la prevención de delitos e infracciones” en la medida que se castiga dicho uso por su capacidad de poner en peligro “instalaciones protegidas” o “el éxito de una operación policial”.

La Sentencia del Tribunal Constitucional mencionada, concreta que el uso no consiste en la mera captación o tenencia de imágenes o datos personales y profesionales, sino que será sancionable solo el acto de publicar o difundir, por medios tradicionales, redes sociales, o plataformas análogas, tales imágenes, siempre que se genere un peligro concreto (no abstracto).

En el momento de los hechos, 26 de junio de 2020, el artículo 36.23 de la citada LO 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, se hallaba plenamente en vigor, y por tanto la motivación de los agentes actuantes respecto a sancionar una infracción era completamente legal, ya que no se había concretado el alcance del término “uso”, ni se había declarado nula la parte “no autorizado”.

En este contexto, la sentencia citada da amparo suficiente a cualquier persona que grabe actuaciones policiales, pues es legal hacerlo. La conducta sancionable, a partir de la Sentencia citada, debe conjugar la difusión con la producción de un peligro concreto para la seguridad personal o familiar de los agentes actuantes. De esta forma, está plenamente garantizada la libertad de información, pues la difusión de las imágenes sin causar un peligro directo concreto tampoco es sancionable. Finalmente, esta conjugación de factores precisos para que la conducta devenga sancionable no permite justificar la aprehensión de los aparatos o instrumentos utilizados para la toma o captación de las imágenes o datos prevista en el artículo 19.2 de la LO 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, lo cual es una garantía adicional respecto del derecho a la libertad de información.